

# ***Honduras: ¿Elecciones sin ganador?***

**Guillermo Molina Chocano**

---

**Guillermo Molina Chocano:** Sociólogo hondureño. Profesor visitante de la Universidad Libre de Berlín (RFA). Actualmente director de Maestría Latinoamericana de Trabajo Social y Secretario General del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de Honduras (CEPROD).

---

Las recién pasadas elecciones presidenciales de Honduras, celebradas el 24 de noviembre de 1985, arrojaron un curioso resultado que muchos analistas califican de una "situación sin ganador", dado el balance de fuerzas derivado del evento y aludiendo a las expectativas frustradas de los principales contendientes que esperaban una mayoría aplastante a su favor. Contrariamente se produjeron precarias ventajas que obligan por primera vez en el país a un complicado sistema de alianzas en un régimen político hasta ahora simplemente bipartidista.

En efecto, y sobre la base de ciertas reformas pactadas a la ley electoral que posibilitó la postulación de varios candidatos presidenciales dentro de cada partido (al estilo de la "Ley de Lemas" uruguaya), José Azcona del Hoyo, político conservador de origen español, se convirtió en presidente electo gracias a la suma de los votos obtenidos por todos los candidatos del Partido Liberal (786.594, o sea un poco más del 50%) que así superó por tercera vez consecutiva en esta década a su tradicional rival el Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, individualmente y no por sumatoria partidaria, el mayor número de votos (656.882) lo obtuvo el candidato del Partido Nacional, Rafael Leonardo Callejas; una cifra superior a la que logró el ahora expresidente Suazo Córdova cuatro años atrás.

De esa manera se produce la paradoja de que no alcanza la presidencia de la República el candidato más votado en términos individuales que supera en más de 200.000 votos a su más cercano seguidor. Pero los pactos son los pactos. Según la célebre "Acta de Compromiso" y las reuniones celebradas en la Fuerza Aérea que pusieron fin a la llamada crisis institucional (1 er. semestre de 1985) precipitada por la Coordinadora de Oposición Democrática y Constitucionalista (CODECO), la proclamación del triunfador debería hacerse a base del cómputo total de los votos por partido político y no por candidatos individuales.

No obstante la alta concurrencia de cerca de 1.600.000 electores y la participación del 84% de la población en edad de votar, los resultados finales no produjeron definiciones contundentes y si dejaron muchas frustraciones: Callejas no pudo ser presidente y Azcona no llegó con la fuerza que esperaba y necesitaba para remontar la maltrecha herencia del anterior gobierno liberal del presidente Suazo.

Las consecuencias de todo esto se reflejan en la heterogénea y dispersa representación parlamentaria que se configura con un bloque bastante sólido del Partido Nacional (63 diputados), una frágil alianza liberal Azcona-Alipo-Bú Giron (30, 16 y 3 diputados respectivamente), una agresiva bancada Suazo-Cordovista (18 diputados) y un pequeño contingente de los nuevos partidos DC y PINU (2 diputados c/u), para un gran total de 134 congresistas, muchos de ellos reelectos y pertenecientes a la vieja casta de políticos tradicionales.

### **PACTOS Y PACTITOS**

Todo ello obliga a inevitables alianzas intra e interpartidarias orientadas por supuesto más por inmediatas ambiciones personales que por vitales intereses nacionales en medio de la aguda crisis regional. Simplemente no cuenta el futuro del país en los próximos cuatro años, ni son importantes los cambios sociales urgentes que los sectores populares reclaman. Sólo interesa ubicarse en una buena posición para obtener ventajas seguras en las nominaciones para candidaturas en la contienda presidencial de 1989.

Así, bajo la retórica de la unidad e integración nacionales y en medio de fuertes resistencias internas a cada bando se concreto el famoso pacto entre "callejistas" y "azonistas" que sin duda viene a sellar la naturaleza y rumbo del nuevo gobierno, que básicamente seguirá los mismos pasos de su predecesor. Dicho arreglo político-partidario sin ningún contenido programático es más bien una repartición de cargos públicos y posiciones de poder que recuerda el célebre y efímero "Pacto de Unidad Nacional" de 1970-71 que culminó con el golpe militar reformista de 1972.

El acuerdo contempla una distribución de los cargos en la Junta Directiva del Congreso, magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, jueces de los diferentes tribunales del país, procuraduría, proveeduría, servicio exterior, entidades descentralizadas del Estado y hasta algunos ministerios. Sin duda, de todo ello lo más importante es la clara hegemonía concedida al Partido Nacional en el Tribunal Nacional de Elecciones, clave política para el próximo proceso electoral, amen de su peso en el control de la administración de justicia a nivel nacional.

El malestar en las bases no se ha hecho esperar, sobre todo en el electorado liberal que vio ingenuamente en Azcona una esperanza de cambio o por lo menos de rectificación de la política antipopular y antinacional del gobierno de Suazo Cordova, totalmente subordinado a los designios de la administración Reagan para América Central. Los comentaristas políticos varían en sus apreciaciones. Unos ven en el pacto la confirmación de una especie de victoria pírrica que arrojo un gobierno sumamente débil sin mayoría parlamentaria y sin cuadros capaces para la conducción de la nave estatal.

En ese sentido y ya antes de asumir el gobierno el movimiento azonista auto-restringe su poder directo en los organismos y niveles decisorios del sistema

político; hace tantas concesiones a sus adversarios que desdibuja definitivamente lo que fue una victoria electoral del Partido Liberal, considerado en el pasado como la mayor fuerza política del país y la de posiciones más progresistas.

Para otros, el pacto es la natural convergencia de dos corrientes afines que juntas concitaron alrededor del 66% de los votos y que comparten los mismos puntos de vista con una simple diferencia de personajes y colores políticos, lo que sólo vendría a expresar una suerte de tendencia a la conservatización de la vida política hondureña o la falta de oportunidades para las fuerzas que plantean una alternativa de cambio democrático o quizás se trate únicamente de la lenta agonía de un modelo desgastado de poder político.

### **POR LA SENDA DEL NEGROPONTE**

Aparte de la dinámica interna como factor determinante del rumbo que ha seguido la vida política del país, hay quienes destacan la influyente presencia y acción de la embajada de los Estados Unidos, principal beneficiario de "Un-Poder-Suma-Cero" que por su debilidad se torne impotente e incapaz de diferenciar los intereses nacionales de Honduras de las conveniencias circunstanciales y permanentes de Washington.

En la mejor tradición de su antecesor y tocayo John D. Negroponte, el célebre artífice junto con el Gral. Alvarez del involucramiento militar de Honduras en el conflicto regional, el actual embajador John Ferch ha estado interviniendo activamente, sin el menor recato diplomático, en los entretelones del famoso pacto político. Para el embajador "Reportero", como lo ha llamado irónicamente la prensa local nada mejor que un gobierno acorralado y sumiso y una "oposición" dócil que aseguren la continuidad de la actual política exterior hondureña.

Con tal propósito, y antes de tomar posesión, fue invitado a Washington el presidente electo a fin de que se "familiarizara" con el Departamento de Estado, de Defensa y con los asesores del Consejo de Seguridad. En sus primeras entrevistas, Azcona había declarado que no le constaba la existencia en territorio hondureño de campamentos de los contrarrevolucionarios nicaragüenses y que básicamente proseguiría la misma línea de política internacional que su predecesor.

Las maniobras militares de los EEUU se han reanudado con toda amplitud en nuevos escenarios y bajo la cobertura de que se trata de la altruista tarea de abrir carreteras de desarrollo en zonas de potencial conflicto social, con una proporción de entrenamiento de 3.000 soldados norteamericanos frente a 150 hondureños en total. Para Washington resulta vital eliminar las resistencias de sectores nacionalistas de las fuerzas armadas a que Honduras sea un canal expedito para el traslado de los suministros a las fuerzas antisandinistas, especialmente ahora que no será solamente "ayuda humanitaria" sino también armas y equipo militar ofensivo.

Aparentemente, el nuevo gobierno ha prometido desbloquear semejantes atrevimientos que le costaron diversas contrariedades al expresidente Suazo cuando, en sus últimos días de gobierno, enfrió sus relaciones con Washington al denunciar que la AID pretendía obligar a una devaluación de la moneda nacional, el Lempira, y se negaba a entregar ayuda prometida por valor de US\$ 75 millones destinados a acortar la brecha fiscal y de balanza de pagos. Altos oficiales norteamericanos y el propio embajador Ferch no pudieron ocultar su disgusto al retirarse de la Casa Presidencial luego de una tensa entrevista sobre estos delicados tópicos.

Tardíamente quiso darse cuenta el mandatario que era factible utilizar el poder de negociación para por lo menos obtener ventajas económicas para el país que, no obstante su ubicación estratégica, recibe menos de la mitad que El Salvador. Este último recibió el año recién pasado más de 300 millones de dólares mientras Honduras apenas alcanzó un monto inferior a los US\$ 135 millones de ayuda económica de los EEUU. Son bien conocidas las disputas territoriales y las rivalidades geopolíticas entre ambas naciones y para nadie es un secreto que los militares hondureños otorgan prioridad absoluta al problema salvadoreño, frente a la obsesión de Washington acerca del peligro de una hipotética como improbable agresión sandinista.

Ante los ojos de la opinión pública no sólo ocurre este desequilibrio desfavorable, sino que además de recibir a un considerable contingente de refugiados, el país es obligado a soportar el costo social de la presencia de los llamados contras nicaragüenses en suelo hondureño. Recientemente la Asociación de Productores de Café se quejó acremente ante las autoridades y la embajada de EEUU de que las acciones antisandinistas desde Honduras impiden la recolección de café en las zonas fronterizas precisamente en una coyuntura alcista de los precios en el mercado internacional. Asimismo, la ola delictiva de secuestros, asesinatos, asaltos, violaciones, etc. que experimenta el país en la actualidad es atribuida en su mayoría a elementos pertenecientes a esas fuerzas irregulares que operan con enorme tolerancia, por decir lo menos.

### **SINGNIFICADO DE LAS ELECCIONES**

El rasgo más sobresaliente de las pasadas elecciones fue nuevamente la participación masiva de la población que al votar preferentemente por los llamados candidatos disidentes o de oposición al interior de los dos grandes partidos tradicionales, Liberal y Nacional (juntos el 90% del total de votos), quiso expresar su rechazo, crítica o condena a la gestión del gobierno saliente, cuyas ejecutorias estuvieron plagadas de errores, arbitrariedades, atropellos a los derechos humanos, medidas económicas antipopulares, política exterior antinacional, intervención en las organizaciones populares de defensa gremial o sindical, violaciones a la Constitución e intentos de modificarla para propiciar el continuismo presidencial, toda suerte de escándalos de corrupción, pérdida de credibilidad y deterioro de la imagen internacional de Honduras.

Todo ello ayuda a explicar la amplia popularidad alcanzada por figuras como la de Callejas o Azcona que, con el auxilio de un millonario financiamiento proveniente de los sectores más importantes del poder económico y con una campaña de propaganda técnicamente muy hábil, preparada por expertos internacionales, lograron forjar una imagen aparentemente progresista, de cambio, sin ofrecer realmente ninguna solución programática concreta que pudiera significar una mejoría sustancial en las dramáticas condiciones de vida de la mayoría del pueblo hondureño. Presentados como "Un nuevo amanecer" o "La gran esperanza nacional" concitaron sin duda la atracción del electorado, pero sin definir a fondo temas como reforma agraria, soberanía nacional, ataque al angustiante problema del desempleo o subempleo, medidas mínimas de solución a la creciente población marginal urbana, atención urgente al hambre y desnutrición infantil, diseño de una política exterior propia e independiente.

En términos de geografía electoral, se mantuvo la tendencia por la cual el Partido Liberal triunfó en los departamentos de mayor grado de modernización y desarrollo relativo donde se encuentra el mayor número de población organizada y expuesta a los medios de comunicación de masas. En el caso del área agroindustrial más importante conformada por los departamentos de Atlántida, Colón, Cortés y Yoro que son, a su vez, los de mayor atracción migratoria hacia la costa norte del país y en donde se encuentran las principales concentraciones de obreros bananeros sindicalizados.

Por su parte, el Partido Nacional mantuvo sus típicos baluartes en la zona sur y en la zona occidental especialmente en los departamentos de Copán, Intibucá y Lempira, con la excepción de La Paz, cuna del expresidente Suazo, que recibió una desproporcionada atención en obras y proyectos durante su mandato, lo que indudablemente influyó en el resultado por primera vez favorable al Partido Liberal.

Sin embargo, a nivel de los centros urbanos más grandes es interesante anotar que el Partido Nacional, o más propiamente el "callejismo", ganó en el área metropolitana de la capital Tegucigalpa donde centró una masiva campaña de proselitismo y de trabajo intenso en los barrios y colonias más populosos de la ciudad, lo que le permitió capturar el gobierno municipal de la misma. Es aquí donde se encuentra el grueso de la burocracia pública y una buena parte del sector terciario de la economía nacional.

Por el contrario, el Partido Liberal resultó mayoritario en las ciudades de mayor dinamismo industrial y comercial y vinculadas a la actividad agroindustrial, forestal y portuaria de exportación-importación como es el caso de San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, La Lima, Olanchito, Puerto Cortes, Trujillo, Siguatepeque. Es en estas zonas donde se localiza la mayor proporción de población económicamente activa asalariada y donde tienen sus sedes las principales asociaciones campesinas de alcance nacional que agrupan a las organizaciones,

empresas, cooperativas y asentamientos del llamado sector reformado del agro hondureño.

### **LAS FUERZAS POLITICAS EMERGENTES**

Es en estas mismas áreas mencionadas donde se dio en general la mayor votación de las nuevas fuerzas y partidos políticos que se diferencian de las dos grandes agrupaciones tradicionales. Se trata del Movimiento Liberal Democrático Revolucionario (M-Líder), de la Democracia Cristiana y del Partido Innovación y Unidad (PINU) que en conjunto alcanzaron alrededor de 100.000 votos, que aunque sólo representan un 6% de la votación total indica que empiezan a abrirse paso las nuevas tendencias, a pesar de los obstáculos legales y financieros que tienen que enfrentar, ante una maquinaria tradicional de poder sumamente cerrada pero, que, por el desgaste político que experimenta, se agrieta aceleradamente al no poder ofrecer respuestas reales y duraderas a la problemática de los sectores populares del país.

El M-líder, movimiento de origen liberal y orientación socialdemócrata, es un ejemplo de las posibilidades que se presentan a cuatro años de plazo de cara a las elecciones de 1989. No obstante, una serie de atropellos y arbitrariedades, como fraudes electorales, negación de su personería jurídica y política, desconocimiento de sus legítimas autoridades y de por lo menos 3 diputados obtenidos limpiamente en las pasadas elecciones, se ha constituido en una fuerza política independiente con un caudal e identidad propios. En menos de 2 años de acción política como tal y con planillas propias de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes en todo el país, obtuvo cerca de 45.000 votos, que recogen buena parte de una actitud consciente y crítica ante el actual statu quo del país.

Además de este fenómeno de crecimiento de las fuerzas políticas emergentes, se pueden constatar como consecuencia importante del proceso electoral ciertos cambios en la actitud ciudadana que han hecho que se desdibujen los agudos enfrentamientos y sobre todo la rígida separación bipartidista, causante en el pasado de las sangrientas y crónicas guerras civiles que produjeron tanta inestabilidad y atraso político para el país.

Se observó en esta campaña mayor fluidez y tolerancia, incluso acercamiento, entre los viejos bandos rivales dentro de un clima de coexistencia y mayor madurez política, quizás por la misma modernización y difusión de los mecanismos de comunicación colectiva y por la irrupción de las nuevas generaciones no comprometidas con las prácticas ancestrales de lealtad tradicional. Es más, el intercambio de lealtades y simpatías partidarias, a contrapelo de las costumbres familiares, transcurrió ahora con toda naturalidad, a diferencia de los estereotipos del pasado que estigmatizaban a las personas que cambiaran su preferencia partidaria.

Esto puede tener un decisivo efecto positivo en el desarrollo de una visión

pluralista de la política, que ya recibió su primer respaldo al presentarse por primera vez en el país la posibilidad de escoger entre nueve candidatos a la Presidencia de la República con sus respectivas planillas. El electorado entendió y aplicó bien este nuevo, aunque provisional sistema de elección en el marco de una campaña bastante civilizada de debates y discusiones públicas, aunque desgraciadamente más proselitista que mínimamente programática.

Con todo, esto puede simplificar la consolidación de un sistema civil de sucesión pacífica del poder, que sufra una real y progresiva democratización en cuanto a igualdad creciente de oportunidades para las diferentes fuerzas políticas y la gradual apertura a nuevos mensajes de contenido doctrinario y a planteamientos programáticos, que formulen alternativas serias ante las graves urgencias nacionales.

Está por verse si los halcones internos y externos que propician un escalonamiento militar del conflicto regional permitirán un perfeccionamiento y fortalecimiento de la democracia en Honduras, no sólo como fórmula jurídico-política, sino como realidad económica y social tangible para las grandes mayorías postergadas y olvidadas por políticos, una vez que éstos alcanzan el poder del Estado, pero que cada vez están más cansadas, desesperadas y con menor paciencia para seguir esperando como eternos convividos de piedra en el festín del poder público.